

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL TITULO:
“LOS TOPES LEGALES EN LAS PENSIONES Y EL FONDO DEL SISTEMA
NACIONAL DE PENSIONES”

PRESENTADO POR EL BACHILLER:
BACHILLER ROMERO MELENDEZ, ANDRÉS

PARA OPTAR EL TITULO DE:

ABOGADO

LIMA – PERÚ

2019

DEDICATORIA

Dedicado a mis progenitores
por hacerme un hombre de
bien.

AGRADECIMIENTO

A mi esposa, por su apoyo

incondicional en tiempos difíciles

CONTENIDO

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTO	3
RESUMEN	5
CAPITULO I	8
MARCO TEÓRICO.....	8
1.1. Antecedente Legislativos. Fuentes normativas	8
1.2. Marco Legal	9
1.3. Análisis Doctrinario de Figuras Jurídicas Presentes en el Expediente y Afines Nacional y/o Extranjero	12
CAPITULO II	15
CASO PRÁCTICO	15
2.1. Planteamiento del Caso	15
2.2. Síntesis del Caso.....	15
2.3. Análisis y Opinión Crítica del Caso	15
CAPITULO III.....	20
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL	20
3.1. Jurisprudencia Nacional	20
CONCLUSIONES DEL CASO.....	23
RECOMENDACIONES DEL CASO	24
BIBLIOGRAFÍA	25

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objeto aportar una visión crítica de la praxis profesional, dado que se puede observar, este caso es una muestra palpable, que se presentan reiteradamente demandas para solicitar el recalcu de pensiones sin respetar las pensiones máximas o topes legales que resultan aplicables al momento de otorgar una pensión de jubilación. El pago de una pensión máxima resulta acorde con la sostenibilidad financiera y la intangibilidad del Fondo del Sistema Nacional de Pensiones, por lo que resulta discutible sostener que existen regímenes especiales exceptuados de dicho parámetro. La controversia que se analiza se inicia por la negativa de la Oficina de Normalización Previsional de recalcular la pensión, al haber comprobado que su goce se encuentra dentro del máximo legal. En el presente trabajo se analiza por un lado los criterios que vienen aplicando los operados jurisdiccionales sobre la pensión máxima legal y por otro lado se analiza los reales alcances de la categoría conceptual de sostenibilidad financiera desarrollada por el Tribunal Constitucional

Palabras claves: Pensión Máxima, Sostenibilidad Financiera, Fondo del Sistema Nacional de Pensiones, Proceso de Amparo, Recurso de Agravio Constitucional, Oficina de Normalización Previsional.

INTRODUCCIÓN

El Sistema Nacional de Pensiones en nuestro País adolece de una serie de problemas financieros que hacen que el pago de pensiones sea insostenible en el tiempo. El Gobierno Central ha implementado una serie de medidas y políticas para evitar que dichos problemas financieros se agudicen.

Es así que dentro de políticas pensionarias se ha establecido el régimen jurídico de pensiones contributivas, valer decir, que el trabajador adquiere el derecho a la pensión cuando acredita determinada edad de jubilación y acumula determinados años de aportes. A diferencia de lo que sucede en otros países del globo, en nuestro país no existe el régimen de pensión no contributiva, por lo menos con contenido general. Por ejemplo, en España, un nacional puede acceder a una pensión de jubilación sin acumular determinados años de aportes, basta acreditar que no tiene los medios económicos para sobrevivir.

Asimismo, de acuerdo con al criterio de sostenibilidad financiera se ha establecido que las pensiones se pueden otorgar siempre y cuando no supere un monto establecido legalmente, ello a pesar de que la remuneración asegurable determinada en favor del asegurado sea realmente beneficiosa para sus intereses.

El legislador ha desarrollado una serie de fórmulas legales a fin de sostener financieramente al Fondo del Sistema Nacional Pensiones. Es así que se ha establecido el reconocimiento de pensiones máximas que si bien no resultan acordes con el costo de vida de nuestro país sirven para resguardar las reservas previsionales. Es por ello que independiente de lo que haya ganado el trabajador en su vida laboral la pensión estará sujeta a un máximo o tope legal

Este trabajo pretende analizar los pronunciamientos emitidos por las diversas instancias jurisdiccionales y los criterios aplicables en los casos en que se pretende un recalcu de la pensión.

La estructura del presente trabajo se divide en tres capítulos; en el primer capítulo se expone el marco teórico, en el segundo capítulo se analiza el caso judicial, en el tercer capítulo se analiza la jurisprudencia pertinente al caso y en el último capítulo se ofrecen nuestros juicios y sugerencias sobre el caso.

CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedente Legislativos. Fuentes normativas

Cabe precisar que tratándose del pago de Pensión de Jubilación Minera de la Ley N° 25009, siempre ha existido topes. Así tenemos que siempre se han fijado topes como montos máximos por concepto de Pensión a abonarse a los jubilados, tal como primigeniamente el artículo 78° del Decreto Ley 19990 estableció, fijando montos máximos a las pensiones reguladas por tal Sistema Nacional de Pensiones, señalando en forma expresa lo siguiente: “El Consejo Directivo del Seguro Social del Perú previo estudio actuarial propondrá al Ministerio de Trabajo el monto máximo de las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones, el que será fijado por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”.

Con posterioridad se dictó el Decreto Ley 22847 de fecha 26 de diciembre de 1979, donde se modificó el artículo 10° y 78° del Decreto Ley 19990, estableciéndose que “la Pensión Máxima mensual que abonará el Seguro Social a partir del 01 de Enero de 1980, será una suma equivalente al 80% de la cantidad fijada en el artículo 10°”. De igual manera, mediante Decreto Supremo N° 078-83-PCM, en su artículo 2° se estableció que la pensión máxima a abonarse ascendería al 80% de siete y media remuneraciones mínimas vitales señaladas para la Provincia de Lima. De igual modo, mediante Decreto Supremo 034-84-PCM se estableció como tope la cantidad ascendente al 80% de 11 remuneraciones mínimas vitales para la Provincia de Lima. De igual manera, mediante Decreto Supremo N° 077-84-PCM de fecha 30 de Noviembre de 1984 se estableció en su artículo 4° lo siguiente: “La remuneración máxima asegurable sobre la que se pagará aportaciones, por cada empleo, para los regímenes mencionados en el artículo anterior, será igual a diez veces el

monto de la remuneración mínima asegurable mensual. La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de Seguridad Social, será una suma equivalente al 80% de la cantidad fijada en el primer párrafo de este artículo, con arreglo a las normas contenidas en el Decreto Ley 19990”. Asimismo, mediante Directiva No. 022-DE-IPSS-92 se fijó como Pensión máxima mensual la suma de S/. 576.00 nuevos soles que ascendía al 80% de 10 sueldos mínimos vitales para la Provincia de Lima.

1.2. Marco Legal

Constitución Política del Perú (1993)

Artículo 10.- Derecho a la Seguridad Social

“El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”.

Artículo 11.- Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones

“El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento”.

“La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado”. (*)

(*) Párrafo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28389, publicada el 17-11-2004.

Artículo 12.- Fondos de la Seguridad Social

“Los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la responsabilidad que señala la ley”.

De los artículos precitados se desprende con claridad que el Derecho a la Pensión es un típico derecho de configuración legal, vale decir que para definir sus precisos alcances, contenidos y contornos necesita de normas legales de desarrollo, tarea que también le corresponde al Tribunal Constitucional a través de las sentencias emitidas como doctrina constitucional y sus precedentes vinculantes.

Decreto Ley 19990

Artículo 8.- “Para los fines del Sistema se considera remuneración asegurable el total de las cantidades percibidas por el asegurado por los servicios que presta a su empleador o empresa, cualquiera que sea la denominación que se les dé, con las excepciones que se consignan en el artículo siguiente” (Ministerio de justicia, 2013).

Artículo 10.- “La remuneración máxima asegurable sobre la que se pagará aportaciones, por cada empleo, será fijada por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo Unico de los Seguros Sociales y previo estudio actuarial”. (Ministerio de justicia, 2013)

“Si la remuneración percibida superara dicha suma, el asegurado pagará, además, por el exceso, hasta una suma igual a la mitad de la remuneración máxima asegurable, el porcentaje que le corresponde sobre dicho exceso, por cada empleo”. (Ministerio de justicia, 2013)

El monto de la remuneración máxima asegurable deberá reajustarse en la proporción que se reajuste el monto de la pensión máxima que otorga la Caja a que se refiere el artículo 78.

Dichos dispositivos leídos en forma sistemática permiten comprender que si bien se establece un procedimiento o metodología de cálculo para determinar el monto de una pensión, en donde se toman en cuenta los parámetros personales y remunerativos del asegurado, siempre

hay que tener presente que existe un máximo legal, al cual el cálculo final de la pensión deberá adecuarse.

Decreto Ley 25967

El Decreto Ley 25967 en su artículo 3° continuó con el establecimiento de fijación de montos máximos por concepto de Pensión de Jubilación. Así tenemos que esta norma estableció en forma taxativa lo siguiente: “La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de Seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 600.00). Esta pensión máxima podrá ser modificada por Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social”. (Fujimori Fujimori, 1992)

En este sentido, y “como quiera que el demandante considera que su pensión inicial debe arrojar un monto mayor al calculado, debemos precisar que toda prestación previsional que otorga la ONP está sujeta a TOPE o PENSION MAXIMA. Ahora bien, debo señalar que en el supuesto negado que se efectúe un cálculo de su pensión tomando como referencia un nuevo parámetro remunerativo, no implicará en ningún caso una mejora de la Pensión, toda vez que el actor viene percibiendo una Pensión por la suma mensual de S/. 913.00 Nuevos Soles, esto es, muy por encima del monto señalado como tope máximo, independientemente del dispositivo legal aplicable”.

En efecto, al caso sub materia es aplicación el tope previsto en el artículo 3° del Decreto Ley N° 25967, el cual establece que: “La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de Seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de seiscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 600.00). (...)” (Fujimori Fujimori, 1992)

De igual manera, mediante Decreto Supremo No. 106-97-EF de fecha 10 de Agosto de 1997, se estableció en forma taxativa que “la Pensión Máxima Mensual que abonará la Oficina de Normalización Previsional por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de seiscientos noventiseis y 00/100 nuevos soles (S/. 696.00) al momento de otorgarse el derecho”.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 056-99-EF de fecha 29 de abril de 1999 se incrementó la pensión máxima mensual en la suma de S/. 807.36 Nuevos Soles, siendo de aplicación a las pensiones que deben ser pagadas a partir del mes de Junio de 1999.

Bajo este contexto, y tomando en cuenta la evolución de los topes pensionarios, al accionante se le otorgó la pensión de acuerdo a ley, tomando como referencia el Decreto de Urgencia 105-2001-EF, el mismo que ha fijado como monto máximo de las Pensiones de Jubilación en la suma de S/. 857.36 nuevos soles.

1.3. Análisis Doctrinario de Figuras Jurídicas Presentes en el Expediente y Afines Nacional y/o Extranjero

Proceso de Amparo

“De acuerdo al artículo 200 inciso 2) de la Constitución de 1993, el amparo procede contra el hecho o la omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos distintos a la libertad individual y a los tutelados por el hábeas data. En términos generales, se mantiene el diseño previsto por la Constitución de 1979” (Abad Yupanqui, 2004)

El proceso de amparo es un proceso que sirva para proteger y tutelares derechos fundamentales que han sido amenazados o vulnerados, siendo consecuencia de esta tutela su restablecimiento. Protege derechos distintos a los protegidos por habeas data y habeas corpus. Si

bien es cierto el Código Procesal Constitucional establece un listado de derechos protegidos por el proceso de amparo, ello debe entenderse como un listado enunciativo y no taxativo, lo cual quiere decir que cabe la protección, a través del proceso de amparo, de otros derechos no enumerados e implícitos que se vayan desarrollando por la dinámica jurisprudencial

Recurso de Agravio Constitucional

De acuerdo al artículo 200°. 2 de la Constitución Política del Estado el Tribunal Constitucional “puede conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de los procesos constitucionales de libertad. Esto quiere decir que el Tribunal Constitucional solo será competente cuando existe una sentencia de segundo grado y cuando la resolución segunda instancia haya declarado improcedente e infundada la demanda”. “La particularidad este recurso es que el mismo está vinculado necesariamente a la protección del contenido constitucional de un derecho fundamental, en consecuencia, el Tribunal Constitucional se encuentra obligado a realizar no solamente un juicio de procedibilidad sino de mérito, puesto que si el caso sometido a su consideración no tiene relevancia constitucional deberá rechazar el recurso de plano”. (Fujimori Fujimori, 1992)

Derecho a la pensión

El derecho a la pensión es un derecho social que implica el pago mensual de una prestación, mayoritariamente económica (en metálico), destinada a sustituir la retribución obtenida por el trabajo y a cubrir las contingencias que surgen al final de la vida laboral. “El Estado debe generar las normas legales y reglamentarias que establezcan las condiciones para el ejercicio del derecho número de años de aportación, la edad de jubilación o lo requisitos para el acceso a las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes así como las reglas para garantizar el funcionamiento de las

instituciones encargadas de la administración de los fondos y del otorgamiento de las prestaciones”. (Landa Arroyo, 2017)

En efecto, a pesar de que derecho a la pensión tiene alcance constitucional ello no quiere decir que es un derecho irrestricto e ilimitado, dado que es necesario que el asegurado acredite determinados requisitos legales. De igual forma, no es un derecho que se liquide o se calcule por iniciativa privada, dado que el sistema de cálculo y el monto máximo será determinado por la norma material.

Sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Pensiones

Es nuestro país existe un sistema dual de regímenes de pensiones, dado que tenemos un sistema privado de pensiones y un sistema público, sin embargo, los riesgos de sostenibilidad y cobertura aún continúan. Es por ello que es necesario establecer un marco normativo que lo que proteja, siendo el mejor ejemplo en nuestro país el establecimiento pensiones contributivas y el establecimiento de pensiones máximas.

Pensiones Máxima

“En el sistema público de pensiones rigen como un límite del derecho a la pensión los principios de equilibrio presupuestal y sostenibilidad financiera, de modo tal que no podrían otorgarse pensiones demasiado elevadas que terminen generando un desfinanciamiento del mismo sistema o pongan en riesgo la capacidad del Estado de asegurar el otorgamiento de las pensiones futuras”. (Landa Arroyo, 2017)

CAPITULO II

CASO PRÁCTICO

2.1. Planteamiento del Caso

Este caso pone en evidencia la necesidad de todo trabajador, llegada la edad jubilación, de aspirar a una pensión justa, digna y equitativa que le permita cubrir sus necesidades básicas. Es por ello que en su demanda pretende realizar una interpretación favorable de la Ley 25009, bajo el entendido que cuando la norma se refiere a una pensión completa estaría permitiendo el cálculo de una pensión sin topes legales. Por otro lado, encontramos los criterios aplicables por los órganos jurisdiccionales que, bajo una lectura constitucional de la sostenibilidad financiera del fondo de pensiones, consideran que no existen regímenes de pensiones exceptuados de las pensiones máximas.

2.2. Síntesis del Caso

El demandante considera que ha vulnerado su derecho a una pensión justa, es por ello que plantea una demanda de amparo, dado que considera que se ha vulnerado su derecho fundamental a la pensión. El actor fundamenta que toda su vida ha laborado para una empresa minera, cuya actividad laboral ha estado sujeta a riesgos. En el presente caso no está en discusión el acceso a una pensión, dado que la propia Oficina de Normalización Previsional ha reconocido una prestación adicional, sino lo que se discute es si el monto reconocido es el correcto.

2.3. Análisis y Opinión Crítica del Caso

El demandante solicita como pretensión que se declare nula la resolución administrativa que le otorga una pensión por un monto ínfimo. Considera que su pensión está mal calculada y

mal calificación, dado que no le corresponde la pensión ordinaria sino la pensión de jubilación minera, la misma que se paga al 100%, con estricto arreglo al Decreto Ley 25009 y el artículo 20° del D.S. 029-89-TR.

Analizando la pretensión se puede advertir que el actor cuestiona que la Oficina de Normalización Previsional haya otorgado pensión de jubilación en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 19990, la misma que establece máximos de pensión, por ello solicita que se otorgue la pensión de jubilación minera completa conforme a lo establecido en la Ley 25009 y su reglamento.

Por su parte, la entidad que gestiona el Sistema Nacional de Pensiones contesta la demanda, señalando que el demandante no se encuentra subsumido dentro del régimen de pensión minera, contemplado en la Ley N° 25009. Argumenta para ello que el trabajo ocupado y la actividad realizada no es propia de los trabajadores mineros.

Los argumentos de la demandada básicamente residen en señalar que el asegurado no ha realizado actividades como trabajador minero de conformidad con lo establecido en la ley N° 25009; puesto que de los certificados de trabajo se advierte que el demandante no acredita su condición de trabajador minero, todo lo contrario acredita más bien haberse desempeñado desde 1949 al 15 de abril de 1991, esto es por más de 32 años como mecánico y luego como sobrestante (entendido que no es un trabajador minero, puesto que es la persona que reemplaza y está bajo las órdenes de un arquitecto y/ profesional a cargo de una obra, es igual al profesional de arquitectura en el rubro construcción pero con menor valor jerárquico); de manera que, si esto es así, al actor no le corresponde una pensión de jubilación minera conforme a lo establecido en la ley 25009. “En consecuencia conforme a lo establecido por el artículo 1 de la ley 25009 y los artículos 2,3 y 6 del Decreto Supremo 029-89- TR, los trabajadores de centros de producción minera no solo deben

reunir los requisitos de edad, aportaciones y trabajo efectivo, sino que también deben acreditar haber laborado bajo una de las modalidades establecidas en la ley 25009”; en consecuencia si tomamos las funciones y condiciones inherentes del puesto de trabajo se puede inferir que si bien el demandante trabajo en un campamento minero, no realizó actividades propias de un trabajador minero; por lo que al no cumplir con los requisitos para acceder a dicho régimen previsional, su demanda debe ser declarada infundada.

El Juzgado de Huancayo analiza los argumentos vertidos por ambas partes y declara infundada la demanda mediante sentencia de fecha 23 de enero del 2013, consideramos que el Juez realiza un correcto análisis de los actuados y un análisis lógico jurídico acorde con la normatividad vigente.

Es así que el Juez de primera instancia acertadamente identifica que el demandante confunde dos leyes pensionarias totalmente diferentes, al pretender se le aplique sin topes y de manera completa su pensión de jubilación, esta pretensión sería amparable si lo pretendido por el demandante serían el otorgamiento de una renta vitalicia mas no de una pensión de jubilación. En consecuencia, la referencia a una “pensión de jubilación completa” no significa en absoluto que ella sea ilimitada, sin topes (como lo quiere el demandante) y que se otorgue con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas comunes a todos los asegurados, por lo que debe ser calculada

teniendo en cuenta la remuneración máxima asegurable, determinada por los artículos 8^{o1}, 9^{o2}, 10^{o3} y 48^{o4} del Decreto Ley N° 19990, y el monto máximo de la pensión.

En este sentido, “el Juzgado acertadamente y en base al principio de legalidad ha rechazado los argumentos del actor, dado que si seguimos el criterio del actor se pondría en riesgo el equilibrio económico del Sistema Nacional de Pensiones y se incumpliría la obligación de velar por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social”.

Como si fuera poco, debemos precisar que existe jurisprudencia dictada por el Poder Judicial y por Tribunal en el sentido de que toda Pensión de Jubilación está sujeta a tope. Para ello es menester precisar que la Quinta Sala Civil de Lima, en los seguidos por Jorge Augusto Rodríguez Herrera la Oficina de Normalización Previsional sobre Acción de Amparo (Expediente 1177-2002), mediante resolución de fecha 25 de Noviembre del 2002 ha señalado que la Pensión de Jubilación está sujeta a topes. De igual manera, la misma Quinta Sala Civil de Lima, en los seguidos por Gabriel Alcides Nureña Velásquez con la Oficina de Normalización Previsional sobre Acción de Amparo (Expediente 1468-2002), mediante resolución de fecha 25 de Noviembre del

¹ Artículo 8.- La suma de las cantidades percibidas por el asegurado por los servicios prestados a su empleador o empresa, según el caso, debe considerarse salario asegurable a efectos del régimen, sin perjuicio de las exclusiones previstas en el artículo siguiente.

² Artículo 9.- Únicamente no se incluyen en la indemnización asegurable a efectos del Régimen las cantidades percibidas por el asegurado por los siguientes conceptos

a) Gratificaciones extraordinarias; b) Indemnización anual sustitutiva de la participación en beneficios; c) Participación en beneficios; d) Prima por riesgo de pérdida de dinero; e) Prima por desgaste de herramientas; y f) Cantidades o bienes facilitados al trabajador para el desempeño de su trabajo, según lo requiera la naturaleza del mismo, tales como los destinados a movilidad, gastos de viaje, representación y vestuario.

³ Artículo 10.- La remuneración máxima asegurable sujeta a aportes por cada trabajo debe ser determinada por Decreto Supremo con aprobación del Consejo de Ministros, a recomendación de la Junta Directiva Única del Seguro Social y previo análisis actuarial. Si la remuneración del asegurado supera este monto, deberá pagar el exceso, hasta un máximo de la mitad de la remuneración máxima asegurable, más el porcentaje que le corresponda sobre dicho exceso, por cada trabajo. La remuneración máxima asegurable debe incrementarse proporcionalmente a la variación de la pensión máxima otorgada por la Caja según el artículo 78.

⁴ Artículo 48.- La pensión pagadera a los asegurados mencionados en el artículo anterior que acrediten las edades especificadas en el artículo 38 será igual al cincuenta por ciento del salario de referencia durante los cinco primeros años completos de cotización. Esta proporción se incrementará en un 2% para los hombres y en un 5% para las mujeres por cada año completo de cotización posterior.

2002 también ha determinado que las Pensiones emanadas del Decreto Ley 19990 están sujetas a topes.

Posteriormente, mediante Sentencia de Vista de 16 mayo del 2013 la Primera Sala Mixta de Huancayo decide revocar la sentencia que declara infundada la demanda y reformándola la declara improcedente.

Finalmente, el demandante como último recurso, presenta un Recurso de Agravio Constitucional con la finalidad que el Tribunal Constitucional advierta la vulneración de un derecho fundamental. Sin embargo, en este caso el Tribunal ha mantenido y reiterado su consolidada doctrina jurisprudencial y ha declarado infundada la demandan mediante sentencia de fecha 14 de junio del 2014, señalando expresamente que el derecho de “pensión jubilación minera completa” establecido en el artículo 2 de la Ley 25009, debe leerse sistemáticamente con el Decreto Ley 19990, lo cual quiere decir que la categoría de jubilación completa no puede entenderse como aquella que se otorga en forma ilimitada e irrestricta. Es cierto que deben calcularse teniendo en cuenta la remuneración máxima asegurable pero sujeta a límites.

Finalmente, el Tribunal Constitucional advierte que le actor actualmente viene percibiendo, según su boleta de pago, el monto de 903.07, en aplicación del incremento dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, por lo que toda discusión sobre el procedimiento de cálculo y régimen aplicable era intrascendente si se hubiese advertido dicho dato objetivo.

CAPITULO III

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

3.1. Jurisprudencia Nacional

Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que los topes de la pensión máxima mensual se establecieron desde la redacción original del artículo 78 del Decreto Ley 19990, que luego fue modificado por el Decreto Ley 22847, que estableció un máximo referido a porcentajes, hasta la promulgación del Decreto Ley 25967, que restableció la pensión máxima a determinar por s. En consecuencia, se observa que desde el inicio del Sistema Nacional de Pensiones se crearon limitaciones a las mensualidades, así como métodos para su ajuste.

Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente N° 4046-2005-PA/TC. Lima, 07 de Julio de 2006

Cabe precisar que el derecho a una “pensión de jubilación minera completa, establecido en el artículo 2 de la Ley 25009, no puede interpretarse aisladamente, sino en concordancia con el Decreto Ley 19990, la propia Ley 25009 y su Reglamento”, Decreto Supremo 029-89-TR. “En consecuencia, la alusión a una pensión de jubilación completa no significa de manera alguna que ella sea ilimitada, sin topes, y que se otorgue con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas comunes a todos los asegurados, por lo que debe ser calculada sobre la base de la remuneración máxima asegurable, establecida por los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Ley 19990, y el monto máximo de la pensión regulado por el artículo 78 del Decreto Ley 19990, modificado por el Decreto Ley 22847 que fijó un máximo referido a porcentajes-, y actualmente por el artículo 3 del Decreto Ley 25967.”

En base a esta sentencia el Tribunal Constitucional aclara los alcances de lo que debe entenderse por pensión minera completa, diferenciándola de la categoría conceptual de pensión máxima o tope legal.

Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente N° 9133-2005- AA/TC. Lima, 21 de Noviembre de 2006.

“El Tribunal Constitucional ha aportado nuevos criterios sobre la aplicación de topes legales. Es así que en la Sentencia recaída en el expediente N° 1294-2004-AA/TC de fecha 30 de noviembre de 2004, ha establecido con meridiana claridad lo siguiente”:

- El Decreto Ley N° 25967 es un paso más en el desarrollo legislativo del tope que se inició con el Decreto Ley N° 19990.
- La protección de los derechos adquiridos en virtud del Decreto Ley N° 19990 se limitará a los requisitos (edad y aportes) y a la fórmula de cálculo de la remuneración de referencia (base para calcular el monto de la pensión correspondiente), pero no a los topes.
- Las normas que regulan la pensión mínima y máxima (límite) deben ser las vigentes en el momento de la presentación de la solicitud de pensión, aunque el asegurado haya cumplido la edad y los años de cotización exigidos antes del 19 de diciembre de 1992.

Cabe señalar que la principal modificación al criterio de los topes está contenida en el fundamento 15, que establece que la aplicación ultraactiva de las disposiciones del Decreto Ley N° 19990 se limitará al cumplimiento de los requisitos (edad y años de aporte) y a la forma de cálculo de la remuneración de referencia (los últimos 12 meses, en lugar de los 36, 48 y 60 especificados en el Decreto Ley N°. 25967), que se utilizará para determinar el mínimo real Dado esto, la afirmación del demandante en su solicitud de que los topes del Decreto Ley 25967 no son

relevantes es incorrecta, ya que estos topes se declaran específicamente vigentes a partir del 19.12.92.

Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el Expediente N° 1294-2004- AA/TC. Lima, 30 de Noviembre de 2004.

CONCLUSIONES DEL CASO

- a) Es menester precisar que tratándose del Derecho a la Seguridad Social (donde está incluido el Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley 19990), toda persona que pretenda acceder a un derecho pensionario, necesariamente deberá cumplir con los requisitos establecidos en tal regulación normativa; debiéndose entender que tales normas son de carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio. De todo ello se colige, que en base a suposiciones o afirmaciones sin mayor sustento, no se puede acceder a determinadas derechos, sobre todo tratándose del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley 19990.
- b) El derecho de pensión es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, sin embargo, no es un derecho absoluto, puede tener restricciones y limitaciones con la finalidad de compatibilizarlo con otros derechos, principios o criterios rectores contenidos en la Constitución Política del Estado, como resulta siendo el criterio rector de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Pensiones.

RECOMENDACIONES DEL CASO

- a) Los Juzgados Constitucionales deben comprender que los procesos constitucionales son procesos sumarios y céleres, es por ello que se han contemplado causales de improcedencia cuando no existe relevancia constitucional o el derecho que se pretende defender no es parte del contenido constitucional protegido. En el caso de autos, el Juez de primera instancia debió advertir que el demandante ya percibía una pensión de jubilación, en consecuencia, no existía vulneración de un derecho fundamental. El demandante pretendía en definitiva un mejor derecho al solicitar un recalcule de su pensión, situación que como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional no es parte del contenido constitucional protegido. Es por ello que los órganos jurisdiccionales cuando se encuentre frente a un supuesto de nivelación o recalcule de pensión, deberán rechazar la demanda de plano, de conformidad con el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, habida cuenta que los procesos constitucionales únicamente se encuentran habilitados para proteger el contenido constitucional protegido de un derecho fundamental. Esta simple práctica jurisdiccional de poco arraigo fomentará el ahorro de costos y esfuerzos dentro del Poder Judicial.

BIBLIOGRAFÍA

- Abad Yupanqui, S. (2004). *El proceso constitucional de amparo*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Fujimori Fujimori, A. (1992). *Decreto Ley 25967*. Lima.
- Landa Arroyo, C. (2017). *Los derechos fundamentales*. Lima: Fondo Editorial Universidad Católica. Obtenido de <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/170363/Los%20derechos%20fundamentales.pdf?cv=1&isAllowed=y&sequence=1>
- Ministerio de justicia. (2013). *Decreto Ley N° 19990*. Lima.
- Oficialía Mayor Del Congreso. (1993). *Constitución Política del Perú*. Lima.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

JUNIN

SEDE CENTRAL (Jr. Parra del Riego 400)

Pag 1 de 1

*1358



420130097582012007581501132000403

NOTIFICACION N° 9758-2013-JR-CI

EXPEDIENTE	00758-2012-0-1501-JR-CI-03	JUZGADO	3° JUZGADO CIVIL - Sede Central
JUEZ	ASTO BONILLA ROSARIO	ESPECIALISTA LEGAL	VICTOR LUIS TOLENTINO VERA
MATERIA	ACCION DE AMPARO		
DEMANDANTE			
DEMANDADO			
DESTINATARIO			

Victor L. Tolentino Vera
 SECRETARIO JUDICIAL
 TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO

DIRECCION LEGAL : JR. JULIO C. TELLO NO. 540 OF. 202 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO

Se adjunta Resolución OCHO de fecha 25/01/2013 a Ffs : 7
 ANEXANDO LO SIGUIENTE:
 INFUNDADA LA DEMANDA

26 DE ENERO DE 2013

29 ENE. 2013



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

3º JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00758-2012-0-1501-JR-CI-03
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : VICTOR LUIS TOLENTINO VERA
DEMANDADO :
DEMANDANTE :

SENTENCIA N° 015 -2013

Resolución Nro Ocho

Huancayo, veintitrés de enero
Del año dos mil trece -

VISTOS:

El escrito de fojas 7 a 18, mediante el cual don
interpone PROCESO DE AMPARO, contra la Oficina De Normalización
Previsional, solicitando como pretensión:

- a) *Se declare nula la resolución N° 00782-92-447-92 de fecha 01 de diciembre del 1992, por estar denegado mi derecho pensionario al 100% dentro de Ley Minera D.L.25009 con arreglo único y exclusivo dentro de los alcances del art. 6° de la ley 25009 y el art. 20° del D.S. 029-89-TR, y conforme a sus verdaderas 12 ultimas ganancias que asciende a la suma de S/. 523.26 nuevos soles, conforme a la hoja de liquidación practicada por la misma empleada.*
- b) *Se efectúe el pago de las pensiones devengadas, mas los intereses legales de acuerdo con los artículo 1242° y siguientes del Código Civil, asimismo solicita se cumpla con hacer efectivo el pago de costos del proceso.*

Fundamentos de hecho de la demanda

Fundamenta su demanda señalando que laboró para la Empresa Minera del Centro del Perú, S.A., desde el 19 de Julio de 1949 hasta el 02 de noviembre de 1991, laborando en interior mina subsuelo, acreditando 42 años, 3 meses y 13 días en zona altamente toxica, expuesto a los riesgos de: toxicidad, peligrosidad e insalubridad, cesando por adolecer enfermedad profesional de Neumoconiosis - Silicosis. En cuanto a resolución N° 00782-92-447-92 de fecha 01 de

Victor L. Tolentino Vera
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO

consecuencia si tomamos las funciones y condiciones inherentes del puesto de trabajo se puede inferir que si bien el demandante trabajo en un campamento minero, no realizó actividades propias de un trabajador minero; por lo que al no cumplir con los requisitos para acceder a dicho régimen previsional, su demanda debe ser declarada infundada.

Mediante resolución siete del 10 de Enero del año 2013, se ordena el ingreso de autos a despacho a fin de emitir sentencia correspondiente.

CONSIDERACIONES DE LA DECISIÓN

Primero.- El demandante solicita como pretensión se declare nula la resolución N° 00782-92-447-92 de fecha 01 de diciembre del 1992, por estar denegado su derecho pensionario al 100% dentro de la Ley Minera D.L. 25009 con arreglo único y exclusivo dentro de los alcances del art. 6° de la ley 25009 y el art. 20° del D.S. 029-89-TR, y conforme a sus verdaderas 12 ultimas ganancias que asciende a la suma de S/. 523.26 nuevos soles, conforme a la hoja de liquidación practicada por la misma emplazada.

Segundo.- Analizando la pretensión del demandante tenemos; que este cuestiona la Resolución N° 00782-92 (fojas 9), de lo expuesto en dicha resolución se extrae que al demandante se le otorgo pensión de Jubilación en virtud de lo establecido en el Decreto Ley 19990, cumpliendo el demandante los requisitos necesarios para el otorgamiento de su pensión conforme a lo establecido en el citado Decreto Ley, sin embargo, lo que ahora pretende el demandante es que se le otorgue la pensión de Jubilación Minera completa conforme a lo establecido en la Ley 25009 y su reglamento

Tercero.- En la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 12 de julio de 2005, el Tribunal Constitucional ha señalado que forman parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para el disfrute de tal derecho, y que la titularidad del derecho invocado debe estar suficientemente acreditada para que sea posible emitir pronunciamiento. El demandante percibe una pensión de jubilación conforme a los parámetros establecidos en el Decreto Ley 19990 y pretende su cambio de riesgo, alegando que le corresponde la pensión de jubilación minera por enfermedad profesional conforme a la Ley 25009 y su Reglamento, el Decreto Supremo 029-89-TR. En consecuencia


Victor L. Tolentino Vera
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO


diciembre del 1992, señala que le priva su derecho a la pensión completa al 100%, puesto que no toma sus verdaderas 12 ultimas ganancias que asciende a la suma de S/. 523.26 nuevos soles, conforme a la hoja de liquidación practicada por la misma emplazada, así como también no toma en cuenta que adolece de Neumoconiosis - Silicosis con 75 % de incapacidad. Por lo expuesto solicita se deje sin efecto dicha resolución por no aplicar el Art. 6º de la ley 25009 y el Art. 20º del D.S. 029-89-TR, para otorgarle su pensión minera teniendo en cuenta sus verdaderas 12 ultimas ganancias que asciende a la suma de S/.523.26 nuevos soles.

Del auto admisorio

Mediante Resolución uno de fecha trece de abril del año dos mil doce (obra en fojas 19), se admite a trámite la demanda de proceso de amparo interpuesta por Serafin Villanes Atencio contra la Oficina De Normalización Previsional, en la vía del proceso especial.

Fundamentos de la contestación de la demanda

Mediante escrito (obra de fojas 22 a 30) la Oficina de Normalización Previsional contesta la demanda señalando que el demandante no se encuentra comprendido dentro de los alcances de la ley N° 25009, para arribar a dicha conclusión basta el puesto de trabajo ocupado y la actividad realizada para darnos cuenta que en puridad don Serafin Villanes Atencio, no realizo actividades como trabajador minero de conformidad con lo establecido en la ley N° 25009; puesto que de los certificados de trabajo se advierte que el demandante no acredita su condición de trabajador minero, todo lo contrario acredita más bien haberse desempeñado desde 1949 al 15 de abril de 1991, esto es por más de 32 años como mecánico y luego como sobrestante (entendido que no es un trabajador minero, puesto que es la persona que reemplaza y está bajo las ordenes de un arquitecto y/ profesional a cargo de una obra, es igual al profesional de arquitectura en el rubro construcción pero con menor valor jerárquico); de manera que, si esto es así, al actor no le corresponde una pensión de jubilación minera conforme a lo establecido en la ley 25009. En consecuencia conforme a lo establecido por el artículo 1 de la ley 25009 y los artículos 2,3 y 6 del Decreto Supremo 029-89-TR, los trabajadores de centros de producción minera no solo deben reunir los requisitos de edad, aportaciones y trabajo efectivo, sino que también deben acreditar haber laborado bajo una de las modalidades establecidas en la ley 25009; en


Victor L. Tolentino Vera
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO

Séptimo.- Del reporte de parámetros personales obrante en el expediente administrativo, se tiene que se tiene como pensión inicial a otorgar a favor del demandante, el monto de S/ 437.45 nuevos soles, monto que fue calculado teniendo en cuenta el año en que ha cesado el demandante, dado que según lo establecido en el artículo 2° del Decreto Supremo N.º 140-90-PCM las pensiones en este año tenían como tope la totalidad de ingresos percibidos por el trabajador⁵, pero sobre los mismo se deben tener en cuenta los artículos 8º, 9º y 10º del Decreto Ley 19990, determinándose tal y como lo establece la hoja de liquidación del demandante como pensión máxima a otorgarse en su favor del monto de S/ 437.45 nuevos soles, monto que como se acredita en la resolución materia de controversia resulta ser el pago en su favor como pensión inicial.

Octavo.- El demandante pretende en el presente caso se le pague la pensión de Jubilación Minera completa, al respecto debemos precisar que como ya se señalo esta pensión de Jubilación se encuentra sujeta a topes pensionarios, entonces si el demandante pretende la pensión inicial de S/ 523.26 nuevos soles ella necesariamente deberá ser calculada teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8º, 9º, 10º y 48º del Decreto Ley 19990, por tanto traería también como resultado el mismo monto de S/ 437.45 nuevos soles dado que este fue sometido a los topes establecidos en la Ley 19990, lo cual no resultaría en lo absoluto mas beneficioso para el demandante.

Noveno.- Ahora si calculamos su pensión teniendo en cuenta como fecha de contingencia el año 2005 (por acreditar en este periodo padecer de enfermedad profesional fojas 5), debemos proceder a calcular la misma teniendo en cuenta la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en la RTC 0349-2011-PA/TC, en la que se ha señalado que "La determinación del monto de la pensión de invalidez en los casos en que la parte demandante haya concluido su vínculo

e) Bonificación por desgaste de herramientas; y

f) Las sumas o bienes entregados al trabajador para la realización de sus labores, exigidos por la naturaleza de éstas, como los destinados a movilidad, viáticos, representación y vestuario.

³ Artículo 10.- La remuneración máxima asegurable sobre la que se pagará aportaciones, por cada empleo, será fijada por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo Unico de los Seguros Sociales y previo estudio actuarial.

Si la remuneración percibida superara dicha suma, el asegurado pagará, además, por el exceso, hasta una suma igual a la mitad de la remuneración máxima asegurable, el porcentaje que le corresponde sobre dicho exceso, por cada empleo.

El monto de la remuneración máxima asegurable deberá reajustarse en la proporción que se reajuste el monto de la pensión máxima que otorga la Caja a que se refiere el artículo 78.

⁴ Artículo 48.- El monto de la pensión que se otorgue a los asegurados comprendidos en el artículo anterior, que acrediten las edades señaladas en el artículo 38, será equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración de referencia por los primeros cinco años completos de aportación. Dicho porcentaje se incrementará en uno punto dos por ciento si son hombres y uno punto cinco por ciento si son mujeres, por cada año completo adicional de aportación.

⁵ "las aportaciones a los regímenes que administra el Instituto Peruano de Seguridad Social serán calculados sobre la totalidad de los ingresos percibidos por el trabajador".


Victor L. Tolentino Vera
 SECRETARIO GENERAL
 TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO

la pretensión del recurrente está comprendida en el supuesto previsto en el fundamento 37.b) de la citada sentencia, motivo por el cual corresponde analizar el fondo de la cuestión controvertida.

Cuarto.- Que, conforme lo dispuesto en los artículos 196° y 197° del Código Procesal Civil: la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, los mismos que son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada y en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión;

Quinto.- De la Resolución cuestionada (fojas 4), se acredita que al demandante se le otorgó pensión de Jubilación teniendo en cuenta el Decreto Ley 19990 del 01 de Diciembre del año 1992 por la suma de S/ 437, 000.00 intis a partir de noviembre del año 1991, asimismo del reporte de parámetros personales (obstante en el expediente administrativo), se advierte que al demandante se le otorgó como pensión inicial el monto de S/ 437.45 nuevos soles.

Sexto.- Lo que hace el demandante en el presente caso es confundir dos leyes pensionarias totalmente diferentes, al pretender se le aplique sin topes y de manera completa su pensión de jubilación, esta pretensión sería amparable si lo pretendido por el demandante serían el otorgamiento de una renta vitalicia mas no de una pensión de jubilación, esto partiendo de lo siguiente; que el derecho de "pensión de jubilación minera completa" no puede interpretarse aisladamente, sino en concordancia con el Decreto Ley N.º 19990 y el Reglamento de la Ley de Jubilación Minera, Decreto Supremo N.º 029-89-TR. En consecuencia, la referencia a una "pensión de jubilación completa" no significa en absoluto que ella sea ilimitada, sin topes (como lo quiere el demandante) y que se otorgue con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas comunes a todos los asegurados, por lo que debe ser calculada teniendo en cuenta la remuneración máxima asegurable, determinada por los artículos 8^o1, 9^o2, 10^o3 y 48^o4 del Decreto Ley N.º 19990, y el monto máximo de la pensión.

¹ Artículo 8.- Para los fines del Sistema se considera remuneración asegurable el total de las cantidades percibidas por el asegurado por los servicios que presta a su empleador o empresa, cualquiera que sea la denominación que se les dé, con las excepciones que se consignan en el artículo siguiente.

² Artículo 9.- Para los fines del Sistema no forman parte de la remuneración asegurable, únicamente las cantidades que perciba el asegurado por los siguientes conceptos:

- a) Gratificaciones extraordinarias;
- b) Asignación Anual sustitutiva del régimen de participación en las utilidades;
- c) Participación en las utilidades;
- d) Bonificación por riesgo de pérdida de dinero;

[Firma]
L. Tolentino Vera
 SECRETARIO JUDICIAL
 TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO

laboral y la enfermedad profesional se haya presentado con posterioridad a dicho evento, el cálculo se efectuará sobre el 100% de la remuneración mínima mensual de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, vigente en los doce meses anteriores a la contingencia, salvo que en dicho lapso se hubiese tenido también la calidad de trabajador, supuesto en el cual se tomará en consideración la remuneración mensual durante los meses respectivos, de modo que, para la determinación del monto de las pensiones según el tipo de invalidez generado, habrá de seguirse lo dispuesto en los artículos pertinentes del Decreto Supremo 003-98-SA", en la fecha de la contingencia que es en el año 2005, se había establecido mediante Decreto de Urgencia N° 022-2003 que el monto de la pensión mínima vital a esta época era de S/ 460.00 nuevos soles, dicho monto como ya se ha señalado en el considerando séptimo necesariamente deberá ser calculada teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 8°, 9°, 10° y 48° del Decreto Ley 19990, por tanto traería como resultado de la pensión a otorgarse a favor del demandante un monto S/ 384.56 nuevos soles monto que resultaría menor a S/ 437.45 nuevos soles monto otorgado a la fecha al demandante como pensión inicial, sin embargo según lo establecido en la Resolución Jefatural N° 001-2002-JEFATURA/ONP, se ha establecido que la pensión que otorgará la ONP a los asegurados que acrediten 20 años o más de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, al 1 de enero de 2002, será a la suma de S/. 415.00; importe que es equivalente a la pensión completa otorgada conforme al artículo 6 de la Ley 25009, ello significa que a los trabajadores mineros que adolezcan de silicosis (neumoconiosis) o su equivalente en la Tabla de Enfermedades Profesionales por excepción, deberá otorgárseles la pensión completa de jubilación como si hubieran acreditado los requisitos previstos legalmente, es decir, edad (45, 50 o 55 años) y aportaciones (20 años), en este sentido se otorgaría a favor del demandante la pensión mínima a dicha época de S/ 415.00 nuevos soles monto que obviamente también es menor al que a la fecha se le viene pagando al demandante, siendo así no existe variación favorable a este, por tanto atentaría contra sus derechos pensionarios ampararse su pretensión.

DÉCIMO.- Con respecto a la segunda pretensión del demandante consistente en el pago de pensiones devengadas, mas los intereses legales y costos del proceso, debemos señalar que al tratarse las mismas de pensiones de naturaleza accesorio conforme a lo establecido en el


Víctor L. Tolentino Vera
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO

artículo 87 del Código Procesal Civil, siguen la suerte de la principal en consecuencia al haber sido desestimada la pretensión principal esta seguirá su suerte.

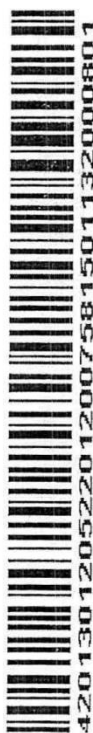
Por estos fundamentos, esta Juzgadora con las facultades que me concede la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y administrando Justicia a nombre de la nación.

FALLO: Declarando **INFUNDADA** la demanda interpuesta por don [redacted] contra la **OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL**, sobre **ACCIÓN DE AMPARO**; en consecuencia, consentida o ejecutoriada sea la presente resolución, archívese definitivamente los autos donde corresponde. Sin condena al pago de costas y costos del proceso. **Notifíquese.**


Victor L. Tolentino Vera
SECRETARIO JUDICIAL
TERCER JUZGADO CIVIL DE HUANCAYO

12/07/2013 11:10:47
Pag 1 de 1

JUNIN
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
SEDE CENTRAL (Jr. Parra del Riego 400)



NOTIFICACION N° 12052-2013-SP-CI

EXPEDIENTE 00758-2012-0-1501-JR-CI-03
RELATOR EDITH PEREZ JUZCAMAITA
MATERIA ACCION DE AMPARO

DEMANDANTE :
DEMANDADO :
DESTINATARIO :

DIRECCION LEGAL : JR. JULIO C. TELLO NO. 540 OF. 202 - JUNIN / HUANCAYO / EL TAMBO

Se adjunta Resolución TRECE de fecha 16/05/2013 a Fjs : 5
ANEXANDO LO SIGUIENTE:
RES. N° 13

12 DE JULIO DE 2013





CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

Primera Sala Mixta de Huancayo

Av. Parra del Riego 4400 El Tambo/Teléfono (064) 381490

Sentencia de Vista N° 684 - 2013.

Expediente N° : 758-2012-0-1501-JR-CI-03.
Demandante :
Demandado :
Materia : Acción Constitucional de Amparo.
Procedencia : Tercer Juzgado Civil de Huancayo.
Juez Superior ponente : César Proaño Cueva.

Resolución número trece.

Huancayo, dieciséis de mayo
del año dos mil trece.-

I.- VISTOS:

1.1. Materia del grado.

Viene en grado de apelación, la sentencia contenida en la resolución número ocho, emitida el veintitrés de enero del año dos mil trece, obrante a folios ciento cincuenta y cinco, que falla: *Declarando infundada la demanda interpuesta por don* contra

sobre acción de amparo; en consecuencia, consentida o ejecutoriada sea la presente resolución, archívese definitivamente los autos donde corresponde. Sin condena al pago de costas y costos del proceso.

ELIZABETH M. MALAZQUE AGUILAR
Asesora Judicial
Primera Sala Mixta de Huancayo
Corte Superior de Justicia de Junín

1.2. Fundamentos de la apelación.

La mencionada sentencia, es apelada por la parte demandante, mediante el escrito que obra a folios ciento sesenta y seis, e indica y fundamenta sobre aquello que considera errado, expresando en resumen, que: a) En el sexto considerando de la sentencia impugnada, se está confundiendo la renta

ROSARIO SUAREZ CAMARERA
Secretaria de Sala
Primera Sala Mixta
Corte Superior de Justicia de Junín


2

vitalicia con una pensión de jubilación, sin tomar en cuenta que la pretensión del recurrente es que se otorgue la pensión completa de jubilación minera por enfermedad profesional al 100% con correcta aplicación del artículo 6° de la Ley N° 25009 y el artículo 20° del D. S. 029-89-TR y conforme a sus doce últimas remuneraciones. b) No se ha tomado en cuenta sus medios probatorios obrante en autos (anexo 1-D) la Hoja de liquidación emitida por la propia demanda (ONP) de la pensión de Renta Vitalicia por enfermedad profesional (D.L. 18846), donde se aprecia su remuneración mensual. c) Su derecho está protegido por el artículo 10° de la Constitución Política del Perú; el artículo 9° del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador. d) El sistema de seguridad social protegida por nuestra Constitución, está dirigida a asegurar el bienestar de todos los trabajadores que han culminado su ciclo laboral y que por efectos del tiempo y enfermedad tienen que dejar de laborar. Con el certificado médico se determina que es portador de enfermedad profesional por adolecer de neumoconiosis-silicosis, en consecuencia le corresponde su derecho a la pensión completa de jubilación minera. e) Se ha resuelto contra el espíritu del Código Procesal Constitucional y el D.L. N° 19990 - 25009, atentando contra sus derechos pensionarios y más aun tratándose de un proceso constitucional de amparo.-

II.- CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Teniendo en cuenta los argumentos de impugnación, se aprecia que el recurrente alega, principalmente, que la demanda debió ampararse y ordenar que la demandada otorgue al actor una pensión minera

PROF. VICENTE QUINTERO CHAVEZ
SECRETARIO DE OFICIO
FISCALIA FISCALIA
CORRESPONDENCIA DE JUSTICIA DE LA LEY



6

SECRET
 SPECIAL AGENT IN CHARGE
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

4

TERCERO. - Conforme a lo expuesto, en el caso de autos, incluso si al actor le correspondiera una pensión minera completa al 100% de su remuneración, por encontrarse en los alcances del artículo 6° de la Ley N° 25009, debe tenerse presente que la Resolución Administrativa Jefatura N° 001-2002-JEFATURA/ONP, establece que la pensión que otorgará a los asegurados que acrediten 20 años de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones o más, será de cuatrocientos quince nuevos soles (S/.415.00).

Por ello, teniendo en cuenta que de acuerdo a la notificación administrativa obrante a folios setenta y cinco, y de la Resolución N° 782-92 de folios cuatro que se cuestiona en este proceso, que, el demandante viene percibiendo una pensión en la suma de cuatrocientos treinta y siete nuevos soles con cuarenta y cinco céntimos (S/.437.45), este Colegiado advierte no existe posibilidad jurídica de que pueda lograr incrementar el monto de su pensión como intenta alcanzar con la demanda de autos.

Por lo tanto, conforme dispone el numeral 6 del artículo 427° del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al caso de autos, corresponde a este Colegiado revocar la sentencia recurrida, y reformarla, declarando improcedente la demanda de autos.

Por estas consideraciones,

III.- DECISIÓN:

REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número ocho, emitida el veintitrés de enero del año dos mil trece, obrante a folios ciento cincuenta y cinco, que *falla: Declarando infundada la demanda interpuesta por don [] contra la [] sobre acción de amparo; en consecuencia, consentida o ejecutoriada, sea la presente resolución, archívese definitivamente los autos*

[Firma]
 ASOCIACIÓN DE ASESORES DE LA
 PROCURADURÍA DE GUAYAS
 PROCURADURÍA DE GUAYAS
 COLEGIO DE ASESORES DE GUAYAS

5

donde corresponde. Sin condena al pago de costas y costos del proceso;
reformándola declararon IMPROCEDENTE la demanda de Amparo de
autos, interpuesta por _____ contra la _____

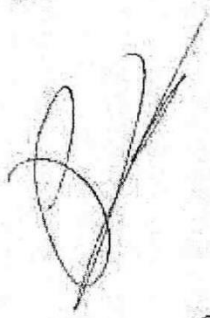


Notifíquese, comuníquese y devuélvase.-

S.s.

Proaño Cueva.

Lujan Zuashabar.

Orihuela Abregú.




SECRETARÍA DE JUSTICIA
Frente a la Sala
CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA DE LIMA

J-1358

**OTDA**

019961-2014-NF

Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 Jr. Azángaro N.º 112 - Lima 1
 Central (01)427-5814 Anexos 128 - 138
 Fax: (01)427-5814 Anx. 222
 Página Web: www.tc.gob.pe E-mail: otda@tc.gob.pe



Lima, 01 de octubre de 2014



Señores : ONP

Domicilio : JR. JULIO C TELLO 540 OF. 202, EL TAMBO - HUANCAYO JUNIN

CEDULA DE NOTIFICACION

EXPEDIENTE : 04887-2013-AA

DEMANDANTE :

DEMANDADO :

Por disposición del señor Presidente del Tribunal Constitucional, hago llegar a Ud., en folios 2 copia simple de la SENTENCIA de fecha 14/07/2014, recaída en la presente causa; para su conocimiento y fines de Ley.

Atentamente,

VANINA KATIUSKA ENCISO ALVAREZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ARCHIVO DEFINITIVO



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04887-2013-PA/TC
JUNÍN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 14 días del mes de julio de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Serafin Villanes Atencio, contra la resolución de fojas 179, de fecha 16 de mayo de 2013, de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declara improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución 782-92, de fecha 1 de diciembre de 1992, mediante la cual se le otorgó pensión de jubilación conforme al Decreto Ley 19990 y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación minera completa de acuerdo con la Ley N° 25009. Asimismo, solicita el abono de los devengados, los intereses legales y los costos procesales.

La emplazada contesta la demanda alegando que no corresponde cambiar la pensión de jubilación del actor por una de jubilación minera, pues no se ha demostrado que haya efectuado labores de trabajador minero.

El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 23 de enero de 2013, declara infundada la demanda argumentando que el cambio de modalidad pensionaria no supondrá un incremento del monto que en la actualidad percibe el demandante.

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. Delimitación del petitorio

El recurrente solicita que se declare inaplicable la Resolución 782-92, de fecha 1 de diciembre de 1992, mediante la cual se le otorgó pensión de jubilación conforme al



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 04887-2013-PA/TC
JUNÍN

Decreto Ley 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación minera de acuerdo con la Ley N° 25009. Asimismo, solicita el abono de los devengados, los intereses legales y los costos procesales.

Considera que aun cuando ha cumplido con acreditar las aportaciones necesarias, la emplazada no le ha otorgado una pensión minera conforme a la Ley N° 25009, motivo por el cual se ha vulnerado su derecho a la pensión.

En atención a las causales de improcedencia contenidas en los incisos 1 y 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, este Tribunal estima que en el presente caso se cuestiona un ámbito que, *prima facie*, integra el contenido protegido del derecho a la pensión, y que, debido a las especiales circunstancias del caso (grave estado de salud), es necesario ingresar a analizar a fin de evitar consecuencias irreparables.

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 de la Constitución)

2.1. Argumentos del demandante

Manifiesta que laboró en la Empresa Minera del Centro del Perú, desde el 19 de julio de 1949 hasta el 2 de noviembre de 1991, desempeñando labores en el Departamento de Concentradora, Sección Mantenimiento Mecánico Concentradora, con la última ocupación de Sobrestante, por lo que al haber efectuado labores mineras correspondía que se le otorgue una pensión de jubilación minera conforme a la Ley N° 25009.

2.2. Argumentos de la demandada

Señala que el demandante no ha cumplido con acreditar haber laborado expuesto a riesgos, motivo por el cual no le corresponde acceder a una pensión de jubilación minera.

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional

- 2.3.1. Los artículos 1 y 2 de la Ley N° 25009 - Ley de jubilación de trabajadores mineros, preceptúan que los trabajadores que laboren en centros de producción minera, metalúrgicos y siderúrgicos entre los cincuenta y cincuenta y cinco años de edad y siempre y cuando acrediten treinta años de aportaciones, de los cuales quince años deben corresponder a trabajo en este tipo de centro de trabajo, a



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04887-2013-PA/TC
JUNÍN

condición de que en la realización de sus labores estén expuestos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.

2.3.2. En la resolución cuestionada (f. 4), consta que se le otorgó al demandante pensión de jubilación conforme al Decreto Ley N° 19990, a partir del 3 de noviembre de 1991, por la suma de 437'450,000.00 intis. Asimismo, en la notificación de fojas 58, así como en la boleta de pago de fojas 99, se advierte que el demandante percibe 903.07 nuevos soles, en aplicación del incremento dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 105-2001, que ha establecido la pensión máxima actual.

2.3.3. Cabe precisar que el derecho de "pensión de jubilación minera completa", establecido en el artículo 2 de la Ley N° 25009, no puede interpretarse aisladamente, mas bien debe interpretarse en concordancia con el Decreto Ley N° 19990, la propia Ley N° 25009 y su Reglamento (Decreto Supremo N° 029-89-TR). En consecuencia, al referirse a una "pensión de jubilación completa", no significa de manera alguna que ella sea ilimitada, sin topes, ni con prescindencia de las condiciones mínimas y máximas comunes a todos los asegurados, por lo que debe ser calculada teniendo en cuenta la remuneración máxima asegurable, delimitada por los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Ley N° 19990 y el monto máximo de la pensión regulado por el artículo 78 del Decreto Ley N° 19990, modificado por el Decreto Ley N° 22847 que estableció un máximo referido a porcentajes, y actualmente por el artículo 3 del Decreto Ley N° 25967.

2.3.4. Sobre el particular, el Decreto Supremo N° 029-89-TR ha dispuesto que la pensión completa a que se refiere la Ley N° 25009 será equivalente al íntegro (100%) de la remuneración de referencia del trabajador, sin que exceda el monto máximo de pensión previsto en el Sistema Nacional de Pensiones, razón por la cual la modificación de su pensión no alteraría el monto prestacional que en la actualidad percibe.

2.3.5. En consecuencia, al no haberse acreditado la vulneración de derecho constitucional alguno, la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 04887-2013-PA/TC
JUNIN**HABIA RESUELTO**

Declarar **INFUNDADA** la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión del recurrente.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARBERA

[Firma]
[Firma]
[Firma]

que certifico:

OSCAR CUA MUÑOZ
SECRETARIO RELATOR
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL